

Una potencialidad distintiva para el desarrollo económico y social

Ana Castellani

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS en la Argentina presentan una potencialidad distintiva y fundamental para encarar los desafíos del nuevo siglo: la posibilidad de convertirse en uno de los principales vectores para el desarrollo económico y social de nuestro país. En efecto, debido a ciertos rasgos propios de su configuración institucional forjada a lo largo de varias décadas –su carácter público y gratuito y su autonomía, especialmente– son actores centrales en la conformación de un proceso de desarrollo por cuatro razones principales: su apertura para incluir a sectores medios y bajos de la pirámide social evitando la cristalización de estructuras sociales elitistas; su nivel de excelencia en la formación de profesionales en una variedad de carreras de grado y posgrado que permite contar con recursos humanos altamente calificados; su capacidad de vinculación con amplios sectores sociales a través de una profusa actividad de extensión que facilita la comunicación y apropiación de saberes hacia el resto de la comunidad; y su rol protagónico en la construcción de capacidades científicas y tecnológicas en articulación con diversos organismos públicos y privados del país.

En la agenda pública muchas veces se solapa esta potencialidad del sistema universitario argentino para promover el desarrollo económico y social del país poniendo el foco exclusivamente en la calidad y la eficiencia de los procesos de enseñanza que despliega, en particular, en la tasa de retención y graduación de los estudiantes. Sin desconocer la relevancia de esos temas, en esta oportunidad nos interesa recuperar el aporte sustantivo que las universidades realizan para la construcción de conocimiento, factor que consideramos indispensable para encarar un proceso de desarrollo sostenido.

Si tomamos en cuenta la experiencia de los países que lograron llevar adelante con éxito este proceso durante las últimas seis décadas, vemos que en todos los casos se observa un incremento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Cualquier ejemplo de desarrollo tardío en Escandinavia, en Oceanía o en el Sudeste de Asia tiene un denominador común: el despliegue sostenido de capacidades científico-tecnológicas (Schteingart, 2017).

¿Qué entendemos exactamente por capacidades científico-tecnológicas? ¿Cómo se construyen? ¿Por qué son indispensables para encarar procesos de desarrollo? ¿Por qué las universidades públicas juegan un rol central en la articulación de estos procesos? ¿Cómo ha sido el derrotero del proceso de construcción de capacidades científico-tecnológicas en la Argentina reciente? Estas son las preguntas que abordaremos en los siguientes apartados.

Desarrollo y ciencias sociales

El problema del (sub)desarrollo de las naciones es uno de los temas que más debate ha generado en las ciencias sociales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La preocupación por identificar las razones que explican el atraso relativo de ciertos países con respecto a otros y, especialmente, la necesidad de encontrar formas concretas de acción que favorezcan el inicio de procesos sostenidos de desarrollo, originó una interesante discusión entre intelectuales de diverso origen disciplinario en torno al rol que debía cumplir el Estado en ese proceso.

A grandes rasgos, se pueden identificar cinco respuestas teóricas principales que han tenido una considerable difusión en el ámbito latinoamericano. Una de ellas es el *estructuralismo*, que pone el acento en el carácter estructural del fenómeno condicionado por la propia dinámica histórica del sistema capitalista, y que considera que el Estado es el principal agente que puede impulsar el proceso de “despegue” a través de un fuerte grado de intervención en la actividad económica que induzca al necesario “cambio estructural” de la matriz productiva (Cardoso y Faletto, 1969; Furtado, 1966; Sunkel y Paz, 1980; Pinto, 1970; Prebisch, 1962). Una segunda es el *neoliberalismo*, que supone que son los agentes económicos operando en un mercado “perfectamente” libre los únicos que pueden garantizar el crecimiento de la economía, y por eso ubican en el exceso de intervención estatal la causa principal de la persistencia del subdesarrollo, ya que distorsiona los precios de los factores productivos (Friedman, 1962; Grindle y Thomas, 1991; Krueger, 2002). En tercer lugar, está el *neoinstitucionalismo*, que se enfoca en la calidad de las instituciones públicas, la fisonomía y el fun-

cionamiento de las burocracias, los modos de regulación y en especial, la dotación de capacidades y los niveles de autonomía del Estado a la hora de diseñar, implementar y supervisar políticas públicas (Evans y Wolfson, 1996; Skocpol, 1989; Sikkink y Wolfson, 1993). En cuarto lugar cabe mencionar la *sociología del desarrollo*, que pone el énfasis en el tipo particular de articulación que se va construyendo en cada momento y lugar entre el accionar de los gobiernos y el comportamiento de las elites económicas (Amsden, 1992; Chibber, 2003; Schneider, 1999). Y en quinto, la *economía de la innovación*, que considera que el aspecto fundamental de la reestructuración productiva es la innovación tecnológica, ya que es la única que permite mejorar la eficiencia en la producción, circulación y consumo de bienes y servicios (Freeman y Soete, 1997; Mazzucato, 2014; Nelson, 1993).

En este trabajo, recuperamos varias de las ideas de este último paradigma para pensar el caso argentino, ya que es el que propicia con más énfasis la necesidad de impulsar políticas científico-tecnológicas para generar saltos de productividad en productos y procesos que permitan modificar de manera cualitativa y cuantitativa las estructuras productivas. En este sentido, se entronca con las ideas de cambio estructural que se proponen desde el *estructuralismo* para diversificar la producción, disminuir la brecha tecnológica con los países centrales y superar la restricción externa; y a la vez se diferencia de los enfoques ortodoxos que asumen que los cambios de la estructura productiva se derivan directamente del crecimiento económico generado por los agentes privados sin necesidad de hacer acciones específicas para impulsarlo desde la política pública (Tabla 1).

Tabla 1. Diversas visiones del cambio estructural

| Visión ortodoxa | Visión heterodoxa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • El cambio estructural es endógeno a la evolución de la dotación de los factores de la producción en cada país. • El crecimiento genera el cambio estructural. • Con el contexto institucional adecuado todos los países progresivamente pasan a desarrollar sectores intensivos en capital y conocimiento. • El Estado no debe desafiar las ventajas comparativas. Debe asumir rol facilitador, resolver fallos de mercados y problemas de coordinación. • No es necesaria la política industrial ni la de Ciencia y Técnica (CyT). | <ul style="list-style-type: none"> • El cambio estructural debe ser inducido, no es espontáneo. • El ritmo de crecimiento depende de la configuración estructural de la economía. • Las capacidades tecnológicas e institucionales evolucionan endógenamente como parte de los aprendizajes en el proceso de producción. • La tecnología es de carácter acumulativo, específico y localizado. Solo con incentivos mercantiles no se desarrolla. • El Estado juega un rol crucial en la articulación entre políticas de CyT e industriales. |

Fuente: Elaboración propia en base a Abeles, Cimoli y Lavarello (2017).

Estas premisas teóricas nos permitirán abordar con mayor precisión el análisis del proceso de construcción de capacidades científico-tecnológicas y su relación con el desarrollo acelerado de los países de industrialización tardía.

Capacidades científico-tecnológicas: el denominador común del desarrollo

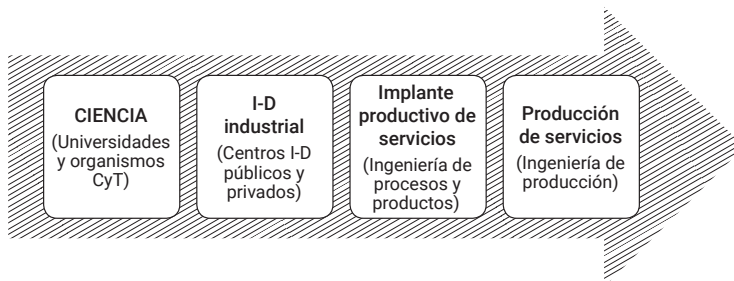
En una reciente investigación empírica, Daniel Schteingart recuperó categorías de análisis de estructuralistas y neoshumpeterianos para tratar de establecer con precisión los factores que inciden en los procesos de desarrollo acelerado. Tomando una muestra de 46 países, analizó la relación entre desarrollo económico, especialización productiva y capacidades científico-tecnológicas para el período 1960-2010 y demostró que son estas capacidades el factor que más incide en el desarrollo de los países, muy por encima de la diversificación de sus exportaciones o del grado de contenido tecnológico de las mismas. Los países que crecieron de modo más acelerado en las últimas décadas (Israel, Corea, Finlandia, Noruega, Canadá, China, Japón), pese a todas sus diferencias, tienen un denominador común: ampliaron sostenidamente sus capacidades científico-tecnológicas (Schteingart, 2017).

Ahora bien, ¿a qué nos referimos exactamente con la noción de capacidades científico-tecnológicas? Este concepto hace referencia a la articulación virtuosa entre los procesos sistemáticos de generación de conocimiento forjados mediante métodos convalidados por la comunidad académica (ciencia) y el conjunto de habilidades, saberes, instrumentos y formas de organización que permiten producir un bien o servicio (tecnología). Estas capacidades permiten el desarrollo de innovaciones que impactan en la estructura productiva, en tanto permiten introducir en el mercado nuevos productos y/o servicios o bien mejorar significativamente sus condiciones de producción (Dvorkin, 2017).

Para que se den estas articulaciones virtuosas es necesario contar con políticas industriales, educativas y científicas que

propicien procesos de innovación con financiamiento adecuado y que ayuden a integrar a científicos, tecnólogos e industriales, generando espacios estratégicos de acumulación. Y es justamente en ese aspecto que las universidades y otros organismos de ciencia y tecnología emergen como actores decisivo ya que cuentan con las mejores condiciones para impulsar los procesos de desarrollo en esta dirección (Figura 1).

Figura 1. Secuencia del proceso de desarrollo de capacidades científico-tecnológicas

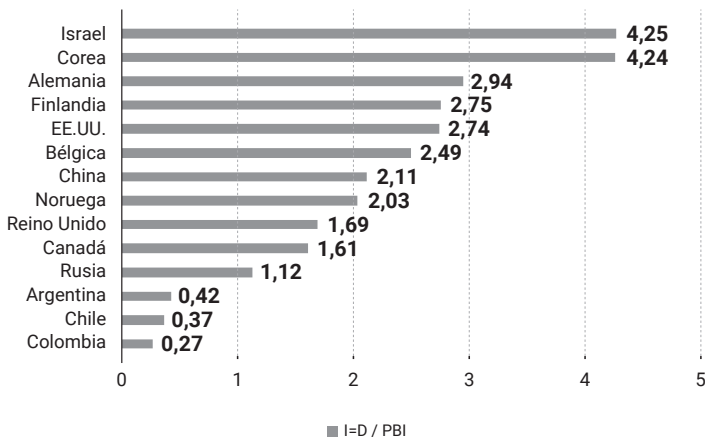


Fuente: Elaboración propia en base a Dvorkin (2017), capítulo 5.

En efecto, como los conocimientos científicos se producen en las universidades y otros organismos públicos de CyT, la articulación adecuada entre estas instituciones y el entramado de empresas productivas mediante políticas consistentes en materia industrial, científica y educativa permitiría lograr en el mediano plazo, un salto cualitativo en la producción de valor agregado, ya que está en mejores condiciones para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios; o bien, porque se pudieron optimizar los procesos, productos o servicios existentes incorporando conocimiento

a la producción. Los datos de inversión en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) de algunos países seleccionados para el año 2016 dan cuenta de este fenómeno: los países de crecimiento acelerado (Israel, Corea, Finlandia, China, Noruega) mantienen tasas de I+D como porcentaje de su PBI muy elevadas. La Argentina, por el contrario, destina menos de medio punto de su producto en inversiones de este tipo (Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación porcentual de I+D en el PBI países seleccionados (2016)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial disponibles en <https://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs>.

¿Cómo lograr una articulación público-privada fructífera para la construcción de capacidades científico-tecnológicas? El neoliberalismo ha sido bastante exitoso en generalizar una idea fuerza que plantea una falsa dicoto-

mía entre el sector público y el sector privado. El primero sería “revolucionario, dinámico, innovador, competitivo” y, por ende, el único capaz de motorizar procesos de innovación y desarrollo; mientras que, por el contrario, el sector público sería “excesivamente interventor, asfixiante, indolente, burocrático e inercial”. Sin embargo, el análisis detallado de las principales innovaciones que generaron saltos tecnológicos desde la segunda mitad del siglo XX muestra con claridad el rol crucial del sector público para impulsarlas. Esto es así porque las innovaciones radicales tienen altas chances de fracaso e implican grandes inversiones con probabilidades de éxito demasiado inciertas. En ese sentido, el Estado es el más osado de todos los actores del sistema; las principales innovaciones recientes fueron resultado de su accionar: Internet, el avión supersónico, la pantalla táctil, la nanotecnología, las tecnologías verdes, el láser, el GPS, el teclado activado por voz, entre otras (Mazzucato, 2014: 30 y 31).

En *El Estado emprendedor*, Mariana Mazzucato muestra con nitidez que las más recientes innovaciones radicales no fueron hechas por capitalistas de riesgo ni inventores de garage –como buscan instalar en el sentido común los defensores del neoliberalismo–. No se habrían producido sin el accionar del Estado en el financiamiento de la investigación básica para todos estos desarrollos. La autora enfatiza que el Estado no es un mero “entrometido” ni un mero “facilitador” del sector privado; es un socio clave capaz de arriesgar mucho más. Y por eso advierte que los gobiernos no deberían ceder ante las presiones de los diversos *lobbies* que quieren bajar los impuestos, ya que la inversión pública en CyT es central para minimizar el riesgo de la inversión en el sector privado. Apuntalar la cooperación público-privada es

vital para legitimar socialmente este proceso. Para eso el Estado tiene que estar convencido de su función, de su rol clave en el proceso de desarrollo. Si no lo está, puede terminar capturado y sometido a intereses privados que solo promueven cuasi rentas de privilegio (Mazzucato, 2014).

Como veremos a continuación, en nuestro país el Estado no termina de asumir ese rol y tampoco se logra construir una coalición social desarrollista estable que lo impulse “desde abajo”. Por eso se observan profundos vaivenes en las políticas macroeconómicas, industriales, educativas y de CyT que generan fuertes discontinuidades en el proceso de construcción de capacidades científico-tecnológicas y dificultades crecientes para transitar un sendero de desarrollo sostenido.

La articulación público-privada en la Argentina: una experiencia de desarrollo fallida

Para consolidar senderos de desarrollo es fundamental una adecuada articulación público-privada, proceso que requiere un conjunto de condiciones que en nuestro país difícilmente se cumplen: a) la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas de actividad y procuren el incremento de las capacidades científico-tecnológicas; b) la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios, capitalistas, científicos y trabajadores para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas; y c) un férreo control estatal sobre el capital, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, evitar (o menguar) los efectos negativos de las posiciones monopólicas que puedan conformarse y, en especial, lograr la rein-

versión productiva de las utilidades (Castellani, 2009 y 2012; Nochteff, 1994).

Este tipo virtuoso de articulación facilita la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados que, en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional (Castellani, 2012).

Sin embargo, cuando el Estado se limita a transferir recursos públicos al capital sin garantizar su uso estratégico se generan ámbitos privilegiados de acumulación. Estos solo favorecen a unas pocas empresas que se expanden sin incrementar su eficiencia y productividad generando una dilapidación de ingresos públicos. Además, incrementan el poder político de los empresarios, que aumentan su injerencia en la orientación de la intervención estatal, debilitan el accionar estatal, por la progresiva pérdida de capacidades administrativas y financieras y, en definitiva, son incapaces de propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido. Estos ámbitos privilegiados se sostienen en una amplia y difusa trama de relaciones que articula los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas. El mantenimiento de esta trama de relaciones, incluso ante el cambio de la gestión económica, perpetúa los privilegios como forma primordial de acumulación de las empresas más grandes del país y desalienta la construcción de un sólido sistema nacional de CyT. La Argentina constituye un ejemplo paradigmático en este sentido (Castellani, 2012).

¿Qué significa construir un sólido sistema nacional de CyT? Básicamente, procurar mediante políticas públicas con-

sistentes que parte del sistema educativo se oriente hacia la formación de recursos humanos de excelencia para la función CyT; que exista financiamiento sostenido para ampliar y mantener la infraestructura adecuada para la investigación y el desarrollo (laboratorios, institutos, centros de escalado, plantas piloto); que se configure un sistema institucional de planificación, promoción, coordinación y estímulo a la investigación; que exista un incremento sostenido de los recursos económico-financieros aplicados a la función CyT; y que se diseñen consistentes mecanismos jurídico-administrativos para regular el funcionamiento de las instituciones de CyT.

Durante el período 2003-2015 los sucesivos gobiernos kirchneristas intentaron la articulación más efectiva del sistema CyT mediante diversos mecanismos que incluyeron el diseño de políticas de enraizamiento de las universidades con sus territorios y las agendas de políticas públicas nacionales; la diversificación de los recursos de financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para diversos grupos, laboratorios e institutos de universidades públicas; la construcción de alianzas entre áreas diversas del gobierno con algunas universidades para impulsar proyectos relacionados con medicina nuclear, diversas sectores de las telecomunicaciones y sector espacial; y una demanda creciente desde el sector público sobre las ciencias sociales para la producción de conocimiento, diagnóstico y prospectiva de la realidad socioeconómica local, así como la creciente participación en programas de desarrollo social (Hurtado *et al.*, 2017).

Como resultado de estas dinámicas, a fines de 2015 se habían logrado conformar núcleos de investigación y desarrollo que comenzaron a mostrar rasgos sistémicos integrados por instituciones de CyT, universidades, empresas estatales,

mixtas y empresas privadas con una cultura diferente a la tradicional de las fracciones concentradas de la economía. Algunos ejemplos se encuentran en el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, la empresa satelital INVAP, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bariloche y la creación de la Universidad Nacional de Río Negro, núcleo al que se suma un conjunto de empresas que crecieron en la región traccionadas por la inversión pública y estrategias de poder de comprar inteligente del Estado; el núcleo conformado por la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), con institutos compartidos con el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el INTA y con la Fundación Argentina de Nanotecnología y el Instituto Antártico instalados en el interior de su campus; el eje conformado por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa YPF Tecnología (Y-TEC), creada en abril de 2013 como sociedad entre YPF y el Conicet; el polo tecnológico creado alrededor de la Universidad Nacional del Litoral, entre otros muchos ejemplos. A esto puede agregarse la recuperación de la escuela técnica de nivel medio que había sido clausurada en la década de 1990 y la apertura de carreras de ingeniería en muchas universidades del país (Hurtado *et al.*, 2017).

Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 estas experiencias se vieron profundamente trastocadas. La caída en el financiamiento de la función I+D es una constante desde entonces; se abandonó la idea de construir un sistema nacional de CyT con un rol estratégico del Estado articulando de forma fructífera con el privado y otra vez florecieron los dis-

cursos pro-emprendedores privados y las oportunidades de negocio de corto plazo en el mercado financiero que ahogan cualquier incentivo para la producción nacional, dejando al país en peores condiciones para afrontar los desafíos crecientes del nuevo siglo.

Coaliciones sociales que impulsen un proyecto de desarrollo

La estructura productiva argentina requiere cambios urgentes si se pretende construir un sendero de desarrollo. Hoy presenta altos grados de heterogeneidad estructural, tanto a nivel sectorial como territorial: eslabones productivos débiles y desarticulados, alto grado de transnacionalización, niveles elevados de desarticulación y debilitamiento de los encadenamientos productivos, escaso peso de las actividades industriales complejas, perfil de inserción externa con sesgo fuerte sesgo importador. A estos rasgos estructurales se suman los déficit en las políticas públicas que podrían ayudar a corregirlos, es especial la descoordinación de los instrumentos de política industrial y científico-tecnológica.

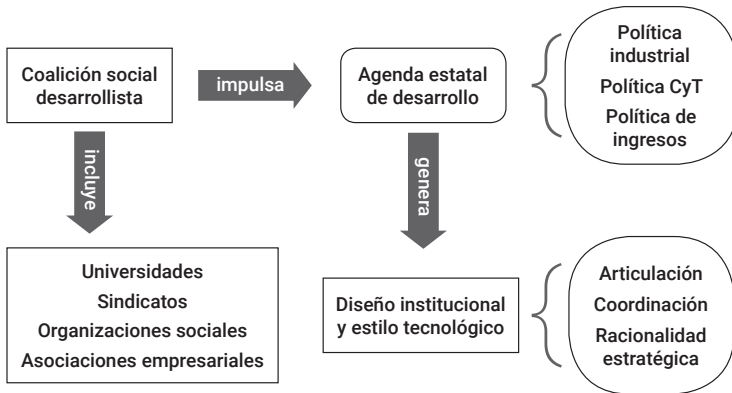
Modificar estas características no es una tarea fácil que se pueda agotar en un mandato presidencial. Requiere de un amplio acuerdo en torno al modelo a seguir y un compromiso firme de los principales actores sociales y los gobiernos de turno para consolidar una serie de políticas de Estado que lo promuevan. La experiencia del período kirchnerista dejó en claro que si no se producen cambios significativos en la matriz productiva, las políticas distributivas son insuficientes para sostener un proceso de crecimiento porque la

restricción externa se manifiesta más temprano que tarde y condiciona las posibilidades de desarrollo. Estos cambios estructurales deberían orientarse en dos direcciones complementarias: por un lado, hacia el incremento del grado de sustitución de importaciones, protegiendo selectivamente determinadas ramas industriales que son multiplicadoras y/o grandes generadoras de puesto de trabajo; por otro, hacia el incentivo de aquellas ramas que pueden lograr tempranamente inserción competitiva en el mercado mundial, apostando a la ampliación de las exportaciones de alto valor agregado.

Para lograr estos cambios es preciso contar con una aciata articulación entre políticas industriales, fiscales y científico-tecnológicas. Como vimos, todas las experiencias exitosas de desarrollo tardío muestran un rasgo en común: la apuesta por la construcción de capacidades científico-tecnológicas aplicadas a la producción de bienes y servicios. Las políticas públicas para el desarrollo tienen que orientarse a la creación de capacidades productivas que incorporen conocimiento científico y tecnológico, ampliación de la infraestructura que incremente la competitividad de la producción nacional, un nuevo pacto fiscal para corregir la regresividad tributaria y una mayor inversión en educación y en innovación y desarrollo. En todos los casos, estas políticas ampliamente consensuadas entre los actores clave (universidades, sindicatos, asociaciones empresarias, organizaciones sociales, etc.) deben establecer beneficios transitorios, metas claras de desempeño y evaluación periódica de resultados para evitar el despilfarro de los recursos públicos. La legitimación social del modelo de desarrollo basado en capacidades CyT es crucial para garantizar su estabilización y para eso es imprescindible la conformación de una coalición social

desarrollista en donde las universidades jueguen un rol central como articuladoras del resto de los actores que la integren (Figura 2).

Figura 2. Configuración de un sendero de desarrollo basado en construcción de capacidades CyT



Fuente: Elaboración propia.

¿Por qué las universidades nacionales juegan un rol protagónico en la construcción de un proceso de desarrollo? Una de las razones es evidente y ya ha sido enunciada: en las casas de altos estudios se congregan los recursos físicos, humanos e institucionales para la construcción de capacidades científico-tecnológicas. Los laboratorios, institutos, centros de innovación en articulación con otros organismos de CyT se encuentran allí; en esos lugares se produce conocimiento y se organizan procesos de transferencia hacia la sociedad. Pero hay otra razón tan importante como la anterior: el carácter público y gratuito de las universidades nacionales y los niveles de excelencia en varios de sus pro-

gramas de enseñanza permiten la formación de cuadros directivos para el sector público y privado de primer nivel.

Según los datos relevados en el Observatorio de las Elites del Centro de Innovación de los Trabajadores sobre las trayectorias educativas de aquellas personas que ocuparon puestos relevantes en el Poder Ejecutivo Nacional (electivos o no) y en la conducción de grandes empresas y/o corporaciones gremiales del empresariado (elites políticas y económicas respectivamente), se observa que entre 1976 y 2001 el 70% de la elite argentina posee educación universitaria completa y que la mayoría asistió a un establecimiento público (84%). Esta tendencia se mantiene para el período 2002-2015 a pesar de la notable ampliación de la oferta educativa privada y el proceso de transnacionalización de las elites que se produjo a partir de la década de 1990: el 73% de los integrantes de las elites argentinas tienen estudios universitarios y en su mayoría eligieron cursarlos en universidades públicas (58%).

Que la formación de las personas que alcanzan posiciones de elites, decisivas en la elaboración de políticas públicas y en la conducción de las empresas más importantes, se haya desplegado en universidades públicas y gratuitas es un acervo distintivo de nuestro país, ya que permite que sectores medios y medios bajos de la pirámide social puedan acceder a las posiciones de poder más altas, desdibujando los rasgos elitistas propios de otras sociedades de la región latinoamericana, y que se formen en sus aulas recursos altamente calificados para los desafíos de la gestión pública y privada que cualquier país necesita para construir un sendero de desarrollo sostenido.

Hoy el gobierno nacional propone un modelo de desarrollo basado en los recursos naturales, la agroindustria, las finan-

zas y algunos pocos nichos de servicios tecnológicos. En un país de 42 millones de habitantes es difícil creer que con esas actividades alcance para lograr niveles plenos de ocupación y mejorar los ingresos reales de la población. Por eso es imperioso dar en todos los espacios posibles esta discusión y formular propuestas concretas de políticas e instituciones capaces de orientar a los actores relevantes en la construcción de un camino de desarrollo nacional que garantice la inclusión de todos los sectores sociales y no solo el crecimiento de algunas fracciones del capital a expensas de las mayorías. Y en esa tarea las universidades públicas están llamadas a jugar un rol central.



Bibliografía

- ABELES, Martín; CIMOLI, Mario y LAVARELLO, Pablo, “Introducción” en *Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en la Argentina*, Santiago de Chile, Naciones Unidas-CEPAL, 2017, págs. 13-26.
- AMSDEN, Alice, “A Theory of Government Intervention in Late Industrialization”, en *State and Market in Development: Synergy or Rivalry*, Colorado, Lynne Rienner Boulder, 1992, págs. 53-84.
- CARDOSO, Fernando y FALETTTO, Enrique, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI Editores, 1969.
- CASTELLANI, Ana, *Estado, empresas y empresarios. La construcción de*

- ámbitos privilegiados de acumulación en la Argentina (1969-1989), Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- , *Recursos públicos, intereses privados: ámbitos privilegiados de acumulación: Argentina, 1966-2000*, Buenos Aires, Unsam Edita, 2012.
- CHIBBER, Vivek, *Locked in Place: State-Building and Late Industrialization in India*, Princeton, Princeton University Press, 2003.
- DVORKIN, Eduardo, “La micromecánica de la relación ciencia-tecnología-producción”, en *¿Qué ciencia quiere el país? Los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales*, Buenos Aires, Colihue, 2017, págs. 69-76.
- EVANS, Peter y WOLFSON, Leandro, “El Estado como problema y como solución”, en *Desarrollo Económico* (140), vol. 35, Buenos Aires, enero-marzo, 1996, págs. 529-562.
- FREEMAN, Chris y SOETE, Luc, *The Economics of Industrial Innovation*, Londres, Routledge, 1997.
- FRIEDMAN, Milton, *Capitalism and Freedom*, Chicago, The University of Chicago Press, 1962.
- FURTADO, Celso, *Subdesarrollo y estancamiento en América Latina*, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1966.
- GRINDLE, Merilee S. y THOMAS, John W., *Public Choices and Policy Change: the Political Economy of Reform in Developing Countries*, Maryland, Johns Hopkins University Press, 1991.
- HURTADO, Diego; BIANCHI, Matías Diego y LAWLER, Diego, “Tecnología, políticas de Estado y modelo de país: el caso Arsat, los satélites geostacionarios versus ‘los cielos abiertos’”, en *Epistemología e Historia de la Ciencia*, vol. 2, n.º 1, Buenos Aires, 2017, págs. 48-71.
- KRUEGER, Anne, *Political Economy of Policy Reform in Developing Countries*, Cambridge, MIT Press, 2002.
- MAZZUCATO, Mariana, *El Estado Emprendedor. Mitos del sector público frente al privado*, Madrid, RBA, 2014.

- NELSON, Richard R. (ed.), *National Innovation Systems: a Comparative Analysis*, Oxford, Oxford University Press, 1993.
- NOCHTEFF, Hugo, “Los senderos perdidos del desarrollo. Elite económica y restricciones al desarrollo en la Argentina”, en AZPIAZU, Daniel y NOCHTEFF, Hugo, *El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadurismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía Política*, Buenos Aires, Flacso, 1994.
- PINTO, Aníbal, “Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural”, en *El Trimestre Económico*, vol. 37, n° 145, México, 1970, págs. 83-100.
- PREBISCH, Raúl, “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, en *Boletín Económico de América Latina* (1), vol. 7, Santiago de Chile, 1962.
- SCHNEIDER, Ben Ross, “La relación entre el Estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo: una revisión de la literatura reciente”, en *Desarrollo Económico*, vol. 3, n° 153 (abril-junio), 1999, págs. 45-75.
- SCHTEINGART, Daniel, “Especialización productiva, capacidades tecnológicas y desarrollo económico: trayectorias nacionales comparadas y análisis del caso noruego desde mediados del siglo XX”, Tesis de doctorado en Sociología, mimeo, IDAES-UNSAM, Buenos Aires, 2017.
- SKOCPOL, Theda, “El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual”, en *Zona Abierta*, n° 50, La Rioja, 1989, págs. 71-122.
- SIKKINK, Kathryn y WOLFSON, Leandro, “Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y la Argentina: un enfoque neoinstitucionalista”, en *Desarrollo Económico*, vol. 32, n° 128, 1993, págs. 543-574.
- SUNKEL, Osvaldo y PAZ, Pedro, *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*, México, Siglo XXI, 1980.